

Doctora:

María Elena Caicedo Vela

Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cali

E. S. D.

Referencia: Alegatos de Conclusión 1ª Instancia

Demandante: Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones (DIAN)

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Radicación: 76-001-33-33-010-2021-00103-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado principal de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, dentro del término legal, presento los respectivos **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**, solicitando desde ya que se profiera **SENTENCIA FAVORABLE**, accediendo a las pretensiones invocadas en el libelo de la demanda.

I. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR ALEGATOS.

Mediante Auto Interlocutorio No. 633 del once (11) de octubre de 2022, notificado por estado electrónico el doce (12) de octubre del mismo año, el despacho decidió correr traslado por el término común de diez (10) días, para que las partes, si a bien lo tienen, presentaran sus alegatos de conclusión. Este término se surte de la siguiente forma: 13 de octubre de 2022 (primer día), 14 de octubre de 2022 (segundo día), 18 de octubre de 2022 (tercer día), 19 de octubre de 2022 (cuarto día), 20 de octubre de 2022 (quinto día), 21 de octubre de 2022 (sexto día), 24 de octubre de 2022 (séptimo día), 25 de octubre de 2022 (octavo día), 26 de octubre de 2022 (noveno día) y 27 de octubre de 2022 (décimo día), por lo que se concluye que el presente escrito es radicado dentro del término previsto para el efecto.

II. DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO PLANTEADA POR EL DESPACHO.

En un juicioso y detallado análisis de los hechos de la demanda y de la oposición a los mismos por parte del extremo pasivo, el Despacho procedió a fijar el litigio mediante Auto Interlocutorio No. 633 del once (11) de octubre de 2022, en los siguientes términos:

“Establecer si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados contenidos en la resolución No. 00008 del 10 de febrero de 2020,

resolución No. 000631-1-88-241-0644-01 del 28 de julio de 2020 y resolución No. 000180 del 11 de febrero de 2021 y, como consecuencia de ello, determinar si hay lugar a la restitución del valor total que la Aseguradora Solidaria de Colombia efectuó, por concepto de la obligación contenida en la resolución de sanción del 28 de julio de 2020.”

III. ARGUMENTOS QUE DEMUESTRAN LA CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ENDILGADAS EN CONTRA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS.

Se pretende demostrar con el desarrollo de este título, que los actos administrativos objeto de litigio, proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el marco de una actuación administrativa de carácter sancionatorio, incurrieron en los cargos de nulidad esbozados con la demanda, valga decir, infracción de las normas superiores y falsa motivación, por cuanto ordenaron hacer efectiva la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales No. 46-994000000125, aun cuando la misma no se encontraba vigente para el momento en que se entendió configurado el siniestro.

De acuerdo a lo anterior, lo transversal al momento de resolver el litigio es determinar en qué momento se entiende configurado el siniestro en las Pólizas de Cumplimiento de Disposiciones Legales. Para este extremo de la Litis, tal como se expuso en la demanda y contrario a lo manifestado por la DIAN en su escrito de contestación, el siniestro en las Pólizas de Cumplimiento de Disposiciones Legales ocurre cuando la resolución sanción que impone la multa adquiere fuerza de ejecutoria, pues lo que se garantiza mediante este tipo de pólizas es el pago de los tributos y de las sanciones a que hubiera lugar. Como soporte de este argumento, es menester hacer un recuento del procedimiento administrativo adelantado por la DIAN y del soporte jurisprudencial y doctrinario que se tiene sobre la materia.

El trámite administrativo que finalizó con la imposición de una sanción a la Agencia de Aduanas Atlantis S.A. Nivel 2, por comisión de la falta administrativa gravísima y grave, prescritas como infractivas y desarrolladas en los numerales 1.2. y 2.1 del artículo 485 del Decreto 2685 de 1999 (hoy numerales 1.2 y 2.1 artículo 622 del Decreto 1165/2019); corresponden a hechos investigados por la DIAN desde el **08 de agosto de 2019**, y constituidos como sanción mediante Resolución No. 1-88-241-064-01-000630 de calenda 21 de julio de 2020. Por lo anterior, una vez consultada la base de datos de mí procurada, encontramos que, el evento que configuró el siniestro, no contaba con contrato de seguro (Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales) vigente.

En este punto debemos recordar que las decisiones de los servidores públicos instrumentadas en actos administrativos, y más aún si revisten el carácter sancionatorio,

para no estar incurso en vicios de nulidad, tienen que soportarse en la observancia del principio fundamental al debido proceso, a los principios que regulan la función pública, conforme a los artículos 6, 29, y 209 de nuestra constitución política, y al acatamiento estricto de los principios orientadores de las actuaciones administrativas. Conforme a lo anterior y para efectos de acreditar la posición de este extremo de la Litis respecto del desarrollo del caso, se pasará a exponer los antecedentes del caso concreto descritos en el acto administrativo sancionatorio (Resolución No. 1-88-241-064-01-000630 de calenda 28 de julio de 2020), de los que se desprende que el contrato de seguro afectado no se encontraba vigente para la fecha de configuración del siniestro.

“ANTECEDENTES DEL CASO

Conforme a los documentos obrantes dentro del expediente, se tiene que la presente investigación tiene su origen en el oficio No. 01-03-238-41-1143 del 08 de agosto de 2019 (folio 1), y radicado interno No. 006216 del 12 de agosto de 2019, mediante el cual el Jefe de Git investigaciones Aduaneras inicia investigación contra ATLANTIS ASESORES ASOCIADOS S.A.S., dentro de la investigación que se adelanta en ese Despacho según DENFIS-No. 2017-211-348-1290 en ejercicio de las facultades de control posteriores al ingreso de mercancías importadas, donde según visita realizada al importador OH SPORT LOGISTIC S.A.S., con NIT 900.580.000-1, se pudo determinar que:

“(...) De acuerdo con el Acta de Hechos No. 1422 del 09/04/2019 (sic), la dirección registrada como domicilio fiscal para los operadores de comercio del importador (...) donde se comprobó que esta corresponde a una casa de habitación y según información obtenida durante la indagación se pudo establecer que dicha empresa nunca operó en esa dirección (...).”

Se anexó, entre otros los siguientes documentos.

Auto Comisorio Aduanero No. 01061 de fecha 08/04/2019 (folio 2).

Acta de Hechos para Acción de Control Posterior No. 1422 de fecha 09/04/2019.

(...)

En la comunicación se advierte que este importador realizó operaciones con la AGENCIA DE ADUANAS ATLANTIS S.A. NIVEL 2 (ahora ATLANTIS ASESORES ASOCIADOS S.A.S.) con NIT 900.068.761-4, con domicilio en la ciudad de Cali, en la cuantía de USD 363.604, para que se establezca si dicha agencia, en desarrollo de la prestación del servicio de agenciamiento

aduanero incurrió en la conducta infractiva contenida en el numeral 2.1 del artículo 485 del Decreto 2685/99. (...)

(...)

Con Auto No. 0105 del 30/10/2019, la división de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional decide dar apertura a la investigación preliminar a nombre de la sociedad AGENCIA DE ADUANAS ATLANTIS S.A. NIVEL 2 (ahora ATLANTIS ASESORES ASOCIADOS S.A.S.) con NIT 900.068.761-4, bajo el subproceso de determinación e imposición de sanciones, cuyas gestiones deben determinar si la sociedad investigada, en desarrollo de la prestación del servicio de agenciamiento aduanero relacionado con la presentación de las declaraciones de aduanas a nombre del importador OH SPORT LOGISTIC S.A.S, con NIT 900.850.000-1, incurrió en falta gravísima (...).

(...)

Los resultados se presentan mediante informe de Acción de Fiscalización No. 0035 del 10/02/2020 (folios 38 a 44), en el cual se concluye formalizar en el expediente CU 2019 2020 0098 mediante auto de apertura de la misma fecha y dentro del cual se formula reproche jurídico a través del Requerimiento Especial Aduanero No. 1-88-238-419-0438-1-000006 del 10/02/2020 (folios 49 a 62), en el que se propone sanción de multa a la sociedad AGENCIA DE ADUANAS ATLANTIS S.A. NIVEL 2 (ahora ATLANTIS ASESORES ASOCIADOS S.A.S.” (Negrita adrede).

Con lo anterior, detallemos uno a uno los anexos de la Póliza de Cumplimiento Disposiciones Legales No. 430-46-994000000125, para aclarar y probar el alcance del contrato de seguro, respecto a su expedición y vigencia. Aseguradora Solidaria de Colombia otorgó la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales No. 430-46-994000000125 bajo las siguientes condiciones:

Póliza No. 994000000125

Afianzado: AGENCIA DE ADUANAS ATLANTIS S.A. NIVEL 2 NIT. 900.068.761-4

Asegurado-Beneficiario: LA NACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2016.

Amparo**Vigencia***Cumplimiento de disposiciones legales**13/12/2016 al 13/03/2018**Cumplimiento de disposiciones legales**13/03/2018 al 19/01/2019**Cumplimiento de disposiciones legales**19/01/2019 al 19/02/2019***BENEFICIARIOS**

NIT. 800197268- U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES:*****OBJETO DE LA GARANTIA*****

LA PRESENTE POLIZA GARANTIZA EL PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE SANCIONES A QUE HAYA LUGAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE AGENCIAMIENTO ADUANERO, Y COMO DECLARANTE EN LA MODALIDAD DE TRÁNSITO ADUANERO NACIONAL, CONTENIDAS EN EL DECRETO 2685 DE 1999, MODIFICADO POR LOS DECRETOS 1232 DE 2001, 2883 DE 2008, Y 1510 DE 2009, Y LAS RESOLUCIONES 4240 DE 2000, RESOLUCIÓN 7002 DE 2001 Y 8274 DE 2008, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE LO MODIFIQUEN Y ADICIONEN.

*****NOTA. ASEGURADORA SOLIDARIA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL BENEFICIO DE EXCLUSION, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 496 DE LA RESOLUCIÓN 4240 DE 2000.**

ASEGURADO/BENEFICIARIO: LA NACIÓN-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.” (Negrita adrede).

Con fundamento en lo expuesto, los límites dentro de los cuales se enmarca la responsabilidad de Aseguradora Solidaria de Colombia como garante del cumplimiento de las obligaciones del agente aduanero en la modalidad de tránsito Aduanero Nacional, se encuentra claramente definida, en cuanto al riesgo que se está cubriendo, a su vigencia –límite temporal- y al valor máximo que se asegura. Dentro del presente asunto, es necesario que entremos a estudiar el límite de responsabilidad de la aseguradora con relación a la vigencia de la cobertura, porque precisamente en este aspecto fue que erró la entidad demandada y es el que sustenta los cargos de nulidad contra los actos administrativos controvertidos.

El artículo 1047 del Código de Comercio establece el contenido de la póliza y en su numeral 6° señala que la póliza de seguros debe expresar: *“la vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras”*

Por otra parte, el artículo 1056 ibídem consagra la delimitación contractual de los riesgos que asume el asegurador, en tal sentido prescribe la norma: *“Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.”*

De esta manera es claro que la obligación que asume la aseguradora con motivo de la expedición de la póliza se debe encontrar claramente delimitada en el tiempo, es decir, **por parte de la aseguradora solamente se responde por la ocurrencia del riesgo asegurado que, valga la redundancia, se materialice durante el período vigencia de la póliza.** Al respecto, la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, en sentencia del 31 de enero de 2007, destacó lo siguiente:

“(…)

Debe tenerse en cuenta que lo que se exige en el régimen de contratos de seguros, en cuanto a su vigencia y cobertura, es que el riesgo efectivamente se materialice durante el período de vigencia de la póliza, puesto que una cosa es el surgimiento del derecho a obtener la indemnización y otra cosa es el derecho a recibir su pago, en que si se concreta una vez se hace la reclamación en la forma establecida por la ley. Al respecto, ha dicho la Sala: En otras palabras, el acto administrativo es la prueba de la realización del riesgo y podría decirse que esta forma de acreditar el siniestro conviene en un privilegio para la administración, ya que le basta su propia decisión fundamentada, que goza de presunción de legalidad. Esta forma de acreditar el siniestro también constituye una ventaja para la aseguradora, ya que tiene la posibilidad de discutir administrativa y judicialmente el acto, en la medida en que los fundamentos jurídicos y fácticos que la administración adujo para acreditar el siniestro no sean suficientes. Se adelanta así el debate en torno a un acto dictado con base en una potestad que dimana de la ley.” (Negrita adrede)

Es válido en este punto referir que la administración se limitó a vincular la póliza de cumplimiento de disposiciones legales No. 430-46-994000000125, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, sin detenerse, tan siquiera, a

estudiar su vigencia. Veamos la motivación de la vinculación del garante, descrita en el acto administrativo sancionatorio del 28 de julio de 2020:

“Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el área de fiscalización adecua la conducta de la sociedad AGENCIA DE ADUANAS ATLANTIS S.A NIVEL 2 (ahora ATLANTIS ASESORES ASOCIADOS S.A.S.) con NIT 900.068.761-4, como infractiva prevista en los numerales 1.2 y 2.1 del artículo 485 del Decreto 2685 de 1999 (hoy numerales 1.2. y 2.1 del artículo 622 del Decreto 1165/2019), y vincula a la presente investigación a las (sic) compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA con NIT. 860.524.654-6, en calidad de garante a través de la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales No. 430-46-994000000125, derivado de la conducta anteriormente expuesta y a la luz de la normatividad aduanera antes citada, que tipifica un hecho sancionable, considera el área de Fiscalización que el declarante AGENCIA DE ADUANAS ATLANTIS S.A. NIVEL 2 (ahora ATLANTIS ASESORES ASOCIADOS S.A.S.) con NIT 900.068.761-4”

El anterior extracto transcrito nada dice sobre el periodo de vigencia de la póliza, ni su consecuente nexo con la fecha de la configuración del siniestro. Entonces, si bien las declaraciones de importación fueron presentadas por el agente aduanero entre el 03 de agosto de 2015 y el 02 de mayo de 2017, como bien lo sostiene la Resolución Sancionatoria del 28 de julio de 2017:

“(…) Se gestionaron ochenta y cinco (85) declaraciones de aduanas con fecha de presentación entre el 03 de agosto de 2015 y el 02 de mayo de 2017 (folio 5) donde la documentación que acredita denota que la verificación del cliente no se llevó a cabo con antelación a la prestación del servicio de agenciamiento y/o se hizo de forma irregular, dado que el resultado de la visita de verificación del domicilio fiscal del importador que fuera adelantado por la autoridad aduanera (…)” (Negrita adrede)

También lo es que dicho actuar supuestamente irregular, no comporta la ocurrencia del siniestro toda vez que el objeto de las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales no es amparar la no entrega de la mercancía o el incumplimiento en los requisitos de diligenciamiento de las declaraciones de importación o cualquier otro hecho constitutivo de infracción, sino el pago de los tributos y las sanciones a que hubiere lugar como consecuencia de dichas actuaciones. Así lo destacó la Honorable Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil en la sentencia ya referenciada:

*“Resaltó que el objeto de la póliza no ampara la no entrega de una mercancía o el incumplimiento en los requisitos en el diligenciamiento de las declaraciones de importación que amparaban dicha mercancía, **sino el pago de los tributos y las sanciones a que hubiere lugar como consecuencia de dichas actuaciones.**”*
(...) (Negrita adrede).

En este sentido, resta formularnos el siguiente interrogante del caso: *¿En qué momento se entiende configurado el siniestro en las Pólizas de Cumplimiento de Disposiciones Legales?* Según reciente jurisprudencia de unificación emitida el 14 de noviembre de 2019 por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Cuarta, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Actor: Seguros Colpatria S.A., Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Radicación Número: 25000-23-37-000-2013-00452-01 (23018) CE-SUJ-4-011, el siniestro en este tipo Pólizas de Cumplimiento de Disposiciones Legales, lo configura la resolución sanción. Veamos:

“(iv) El único acto que debe notificarse a los garantes y aseguradoras es la resolución sanción, con el fin de que ejerzan su derecho de contradicción y defensa, pues ese acto es el que configura el siniestro amparado por la póliza de cumplimiento de disposiciones legales.” (Negrita adrede).

Siguiendo esta misma línea, la Subdirectora de Gestión de Fiscalización Aduanera en memorando No. 000103 del 27 de mayo de 2021 con destino a los Directores Seccionales de Aduanas, Directores Seccionales de Impuestos y Aduanas, Directores Seccionales Delegados de Impuestos y Aduanas, Jefes de División de Gestión de Fiscalización y Jefes de División de Gestión de Liquidación, hizo las siguientes advertencias de cara a los seguros de cumplimiento de disposiciones legales que respaldan operaciones aduaneras, como el caso que nos ocupa:

“En primer lugar, en el contexto de los seguros de cumplimiento que respaldan las operaciones aduaneras, por vigencia del seguro debe entenderse el periodo que se encuentra comprendido entre las fechas establecidas en la carátula de la póliza, y durante el cual, de presentarse un siniestro en los términos acordados por las partes en el contrato, nace en cabeza del asegurado un derecho a reclamar ante la respectiva compañía aseguradora la garantía de cumplimiento otorgada para respaldar la operación aduanera.

En segundo lugar, la fecha de configuración del siniestro es el momento en que, de acuerdo con los términos acordados por las partes en la póliza, una vez notificado oportuna y debidamente a la aseguradora acerca de la existencia del siniestro, se entiende que el riesgo asegurado por el seguro se ha materializado

*durante la vigencia de la póliza y, por ende, nace en cabeza del asegurado un derecho a reclamar ante la respectiva compañía aseguradora (y la consiguiente obligación en cabeza de la aseguradora de pagar) la garantía de cumplimiento otorgada para respaldar la operación. **En materia de las pólizas de cumplimiento que se otorgan en el marco de las operaciones aduaneras, la práctica común que acuerdan las partes es condicionar la existencia del siniestro a que la obligación incumplida haya sido declarada mediante resolución administrativa debidamente ejecutoriada. De esta manera, sin la existencia de un acto administrativo ejecutoriado que declare el incumplimiento no es posible hablar de la existencia de un siniestro, así en la práctica una de las partes haya incumplido una obligación contractual.***

En tercer lugar, la póliza por afectar es aquella que, durante la vigencia del contrato de seguro, asegura el cumplimiento de las obligaciones de la operación aduanera. En la determinación de la póliza por afectar es importante que se guarde consistencia temporal entre el contrato cuyas obligaciones están siendo aseguradas y el contrato de seguro. Lo anterior debido a que en este tipo de operaciones es común encontrar varias pólizas vigentes, pero cada una respalda una operación independiente.

En este orden de ideas, la posibilidad de exigirle el cumplimiento de un contrato a una entidad aseguradora dependerá que la resolución emitida por la autoridad administrativa quede debidamente ejecutoriada durante la vigencia de la póliza.” (Negrita adrede)

Arribando los anteriores criterios al caso concreto, encontramos que, en efecto, en la póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales No. 430-46-994000000125 expedida por Aseguradora Solidara de Colombia Entidad Cooperativa, las partes condicionaron la existencia del siniestro a que la obligación incumplida haya sido declarada mediante resolución sancionatoria. Miremos:

*****OBJETO DE LA GARANTÍA*****

LA PRESENTE PÓLIZA GARANTIZA EL PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE SANCIONES A QUE HAYA LUGAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DEL AGENCIAMIENTO ADUANERO (...)
(Negrita adrede).

Pues antes de la Resolución Sanción, la aseguradora no tiene la capacidad de conocer, sin ningún margen de duda, cuál es el monto al que asciende la multa que se le impone al afianzado en razón al incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la actividad

del agenciamiento aduanero; habida cuenta que las etapas anteriores como, por ejemplo, el requerimiento especial aduanero, es una mera expectativa de multa, tan es así que la propia **DIAN** la denomina como “*Propuesta Sancionatoria*”. Por esta razón, el siniestro en este tipo de pólizas lo constituye el acto administrativo sancionatorio y no la infracción de las responsabilidades aduaneras, pues lo que se garantiza a través de las mismas es el pago de la sanción y no el hecho constitutivo de infracción que se resume en la no entrega de una mercancía o el incumplimiento en los requisitos del diligenciamiento de las declaraciones de importación.

En buena hora, como lo vimos, la propia Subdirectora de Gestión de Fiscalización Aduanera de la DIAN destaca, que sin la existencia de un acto administrativo ejecutoriado que declare el incumplimiento no es posible hablar de un siniestro en materia de pólizas de cumplimiento que se otorgan en el marco de las operaciones aduaneras. En este evento, el acto administrativo declarativo de incumplimiento y que configura el siniestro lo constituye la **Resolución Sanción del 28 de julio de 2020**, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 26 de febrero de 2021, tal como se explicó en el hecho noveno de la demanda.

En este sentido, para hacer efectiva la póliza de cumplimiento No.430-46-994000000125 por parte de la DIAN, era requisito ineludible que la misma se encontrara vigente, por lo menos, para la fecha en que fue proferida la Resolución Sanción o, para la fecha en que quedó debidamente ejecutoriada, tal como lo expuso la referida Subdirectora en el memorando ya reseñado: “***En este orden de ideas, la posibilidad de exigirle el cumplimiento de un contrato a una entidad aseguradora dependerá que la resolución emitida por la autoridad administrativa quede debidamente ejecutoriada durante la vigencia de la póliza***” (Negrita adrede).

No obstante, al revisar el periodo de vigencia de aludida póliza (del 13 de diciembre de 2016 al 19 de febrero de 2019) en conjunto con la fecha en que fue proferida la resolución sanción y que quedó debidamente ejecutoriada (28 de julio de 2020 y 26 de febrero de 2021, respectivamente), salta a la vista que la misma no se encontraba vigente, porque el siniestro, en este caso, ocurrió por fuera del término de cobertura, lo que hacía ilegal hacer efectiva la misma, en los términos y condiciones que dispuso el artículo cuarto del acto administrativo sancionatorio, confirmado mediante Resolución No 000180 de fecha 11 de febrero del 2021 “***POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION***”, de la que es posible extraer el error de interpretación en la configuración del siniestro que tanto se ha venido sosteniendo, por cuanto consideró que el mismo se tenía por acreditado a partir del 03 de agosto de 2015 al 02 de mayo de 2017 (fechas en las que se presentaron las declaraciones de aduanas objeto de investigación y posterior sanción) y no con la Resolución Sanción del 28 de julio de 2020 o su fecha de ejecutoria, como era lo correcto:

“Adentrando al fondo de la Litis, es menester mencionar que el recurrente plantea de manera explícita que el siniestro ocurrió con posterioridad al término de la vigencia de la Póliza de Cumplimiento de Disposiciones Legales Nro. 430-46-994000000125, no obstante está probado que el siniestro tuvo ocurrencia estando vigente la póliza 430 46 994000000125 anexo 0 y 3 si se encontraban vigente para la ocurrencia de los hechos entre el día 03/08/2015 y 02705/2017 (sic) y se hace exigible mediante el presente acto administrativo, el cual se libra dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del siniestro, por lo que es evidente que esta instancia no comparte la tesis planteada.”

En los anteriores términos se considera que los actos administrativos incurrieron en los cargos de nulidad endilgados, habida cuenta que se logró demostrar: **i)** que hubo falta de aplicación de las disposiciones normativas que regulan el contrato de seguro, así como también de la jurisprudencia unificadora de criterio respecto al momento en que se debe entender configurado el siniestro en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales, y del memorando No. 00103 del 27 de mayo de 2021 emitido por la Subdirectora de Gestión de Fiscalización Aduanera y **ii)** se tuvo por acreditados hechos como determinantes de la decisión cuando en realidad no lo estaban, en especial, los relacionados con la vigencia de la póliza de cumplimiento de disposiciones legales No.430-46-994000000125 y la fecha en que se entendió ocurrido y/o configurado el siniestro.

IV. PETICIÓN

De conformidad con lo expuesto en precedencia, solicito al Honorable Despacho, se sirva declarar la nulidad de los actos administrativos censurados y se conceda el respectivo restablecimiento del derecho en favor de Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, en los términos planteados en la fijación del litigio propuesta.

No siendo otro el motivo de la presente,

Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. 19.395.114 de Bogotá

T.P. 39.116 del C. S. de la J.